

El jueves 11 de octubre el *conseller* de Cultura, Font de Mora, y según recoge EL PAÍS de 14/11/2004, consideró en las Cortes "ilegítimo" y una "estafa intelectual" exigir al mundo cultural concreción de resultados, pues es "imposible" evaluar lo "intangible". Todo ello en un debate sobre datos de la Bienal. Casi al mismo tiempo su compañero de gabinete, Gerardo Camps, en rueda de prensa junto con el director de CACSA, José Manuel Aguilar, señalaba, a partir de la presentación de un informe del IVIE, que la tasa de rentabilidad social (sic) de la Ciudad de la Artes y las Ciencias es del 9%, por lo que concluía que el complejo se amortiza en sólo 10 años (*Levante*, 14/11/2004.) No me negarán que resulta paradójico que sean tan técnicamente precisos en la contabilidad de los impactos de CAC y tan refractarios y escrupulosos para la Bienal. ¿No se trata en ambos casos de evaluar elementos intangibles que tiene que ver con la atraktividad de la ciudad, la articulación de su dimensión simbólica y sus efectos sobre los ciudadanos?

He de decir, sin embargo, que a ambas perspectivas contables se les pueden plantear muchas objeciones.

Por empezar por la más obvia, es evidente que Font de Mora está equivocado. Y esto es lo que pasa cuando a los responsables de la política cultural los cambian, como la ropa de Zara, cada jueves. Los recién llegados, piensan que de política cultural, como de fútbol, todo el mundo sabe algo, y recurren a los lugares comunes para superar sus lagunas. Así llevamos casi 10 años. Cada nuevo *conseller* de Cultura, secretario autonómico o director general de alguna área de la cultura y su capilla de asesores, obviando el estado de la cuestión, las experiencias comparadas y lo que aportan las Ciencias Sociales, empieza desde cero en la senda del conocimiento, hasta que... les encomiendan puestos de más enjundia que las gilipolleces de la cultura. Ya sabemos que los cargos en política cultural son muy agradecidos. Visten mucho y queman poco. Y si no, que se lo digan a Villalonga, al propio Camps, a Esteban González e incluso, a pesar de los pesares, a Consuelo Ciscar y hasta a Esperanza Aguirre.

Naturalmente que se pueden evaluar los intangibles y ya lo llevan haciendo muchos años los ingleses, alemanes, italianos o americanos. Sólo es una cuestión de dedi-

Cuentos de contar cultura

PAU RAUSELL

car voluntad y recursos a ello, ya que técnicas variadas existen. Con sólo el 0,7% de lo que se embolsan los arquitectos de "lo intangible" como Settembrini, Papas o Barañano podríamos evaluar hasta el coste de la opereta lingüística en la que se ha embarcado nuestro lúgubre presidente Camps.

Entre todas esas técnicas, podemos encontrar una, que son los estudios de impacto económico (EIE.) Que es la que más o menos utiliza el IVIE para la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esta metodología estuvo muy de moda en los años 70 y 80, y en 1987 apareció una especie de manual de la National Conference of State Legislature de USA, en la que se recogían algunas de las experiencias más significativas. Una década más tarde en 1996 Frank van Puffelen publicaba un artículo en el *European Journal of Cultural Policies* donde evidenciaba algunos de los abusos de este tipo de estudios, y aquí mismo en España, también la *Revista Econòmica de Catalunya* publicaba en 1997 un artículo de Ezequiel Baró y Lluís Bonet donde aparecían los problemas de evaluación del impacto económico de los gastos públicos en cultura. Básicamente los problemas de los estudios de impacto económico son de dos tipos: o técnicos o de instrumentalización. Entre los técnicos cabe recoger, y perdonen el paréntesis de jerga, la no distinción entre efectos netos y brutos, la no consideración de los efectos desplazamiento y sustitución, el excesivo optimismo en la estimación de los efectos positivos, las dobles contabilidades y problemas de agregación, la no consideración de los costes de oportunidad y la no consideración de los efectos redistributivos. La verdad es que no tengo criterio para determinar cuántos de estos problemas, y si los hay, presenta el estudio del IVIE, pues hace ya algún tiempo que desistí en perder energías tratando de conseguir investigaciones financiadas con dinero público pero que se sumergen en la clandestinidad y que sólo se hacen visibles en sus cifras más burdas para ruedas de prensa y folletos de propaganda. En lo que sí tengo criterio es para alertar sobre los problemas de instru-

mentalización de los EIE. Un estudio de impacto económico sólo dice lo que dice: a partir de una concreta metodología, determina cuál es el impacto económico de un determinado proyecto, pero en ningún caso puede entenderse como un

certificado de idoneidad sobre dicho proyecto. Los estudios de impacto económico, dependiendo de lo que cuenten, pueden desvirtuar la necesaria multidimensionalidad de los proyectos. ¿La CAC tiene como objetivo único la atracción de visitantes? ¿Y qué hacemos con el modelo de articulación de la ciudad, con la dimensión simbólica que comporta, con la difusión del conocimiento, con la participación social, etc...? que son esas cosas que aparecen en letras mayúsculas cuando se justifican los proyectos. Un paso previo para realizar un EIE es dedicar tiempos y recursos a tratar de determinar "qué" y "cómo" contar. Y este "qué" y "cómo" debe estar orientado a las necesidades y las aspiraciones de las sociedades sobre las que se formula la evaluación. No tengo ninguna duda de que los EIE son herramientas muy útiles para que los ciudadanos podamos ordenar y otorgar consistencia lógica a nuestras preferencias y que además nos aportan información muy valiosa para posicionarnos. Pero no olvidemos que los EIE, al final y en sociedades democráticas, deben servir para nutrir el debate social y no para sustituirlo. Un EIE, y de acuerdo con las nuevas propuestas, es mucho menos un ejercicio técnico y mucho más uno de concertación social. Y he de decirles que Gerardo Camps sí comete una estafa intelectual al tratar de presentar el estudio del IVIE como si fuera un irrefutable evidencia técnica que le blindará frente a la improvisación, la desmesura, el descontrol, la ineficacia, la falta de transparencia y el nulo debate social que está caracterizando el desarrollo y la puesta en marcha de un elemento tan importante para Valencia como es la CAC.

No sé si prefiero la interesada ignorancia de Font de Mora o la manipulada pericia técnica de Gerardo Camps. En ambos casos sólo se trata de estratagemas que empobrecen el calado democrático de esta sociedad.

Pau Rausell Köster pertenece a la unidad de Investigación en Economía Aplicada a la Cultura de la Universitat de València.

Consejos

VICENT FRANCH

Un grupo de académicos le pide a la presidenta del organismo que indague si la AVL tiene competencia o no para tratar sobre el asunto del documento donde se plantea una aproximación a la hipotética doble denominación de la lengua propia de los valencianos, dirigiéndose al Consell Jurídic Consultiu, mientras el Consell habría requerido de sus propios servicios jurídicos un informe sobre si la AVL es competente para tomar acuerdos sobre ello.

Mientras tanto, otras informaciones señalan que para el próximo 22 de diciembre y mediante la propuesta de una mayoría estatutariamente suficiente, otro grupo de académicos propone que el pleno de la institución someta a debate y aprobación el texto sobre la doble denominación que venía preparando una ponencia con toda tranquilidad hasta que empezó el bombardeo de la *Batalla de Madrid*.

Así, pues, a la guerra mediática, a la de nervios entre los gobiernos autónomos de Catalunya y Madrid, a la del de València con los dos primeros, y a la de la calle de nuevo ocupada por los de la algarada de siempre —con más yugos y flechas que de costumbre—, se une ahora la de una supuesta batalla jurídica entre las competencias que unos quizás tienen y que los otros entienden que quizás no deban tener.

Y es que las interferencias, como las desgracias, nunca vienen solas: los daños del *Efecto Carod*, con epicentro en Catalunya, se notan aquí, lejos de su metrópoli, como ocurre con los sismos. Es por ello que, ante las maniobras que ahora mismo se están produciendo entre Consell y AVL debería oponerse un sereno análisis sobre si no estaremos protagonizando un guiño escrito ya hace mucho tiempo por los que nunca creyeron en la AVL, los que desdeñaron cualquier acuerdo entre valencianos, y los que apostaron no por la resistencia lingüística y la travesía del desierto sino por victimismos más o menos rentables en lo inmediato y políticamente conducentes a la nada, cuando no a la legitimación de lo impresentable, es decir, de todos aquellos cuyo objetivo no está en la salud del valenciano sino en acabar con él como lengua de relación y de cultura normal.

Puede felicitarse el líder de ERC de haber agudizado al máximo las contradicciones de la vía valenciana hacia la recuperación de esa lengua que dice compartir con nosotros, y puede sentirse cínicamente orgulloso de haber provocado manifestaciones, desconcierto y desasosiego entre los valencianos, porque le ha hecho —a sabiendas— el trabajo sucio no sólo a quienes sólo piensan en su negocio de gestores de la miseria y de la marginación —ese catalanismo impolítico de aquí, inasequible al desaliento pero siempre atento a la subvención—, sino a quienes sólo les conmueve el recuerdo de la España del extinto, es decir, a la extrema derecha.

Ni nuestro Gobierno ni nuestra AVL deberían caer en la penúltima trampa que estos estrategas de la nada les han tendido. A mi modesto entender, y dado el ruido de chulería y exhibicionismo de mesianismos prepotentes, lo más recomendable sería, primero, que la AVL se pronunciase sobre un único punto, es decir, pidiendo calma, reclamando para sí ese clima de serenidad que se supone es condición inexcusable para cualquier trabajo científico; segundo, que el Gobierno se olvide de dictámenes a esgrimir bajo el fuego cruzado; y, tercero, que los acuerdos de la AVL que puedan avivar la guerra simplemente se pospongan para cuando no haya tribulación, que es, además, lo que la santa escritora habría recomendado.

Vicent.franch@eresmas.net

OPINIÓN

DEL LECTOR

Esta sección de *El País Comunidad Valenciana* incluye cartas remitidas por los lectores. Los textos no deben exceder de 25 líneas mecanografiadas. En ellos deben figurar la firma, el domicilio, el teléfono y el número de DNI o pasaporte de su autor.

EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se devolverán originales, ni se facilitará información postal o telefónica. Las cartas (se ruega brevedad) pueden enviarse por correo, fax (96 351 17 31) o mediante correo electrónico (valencia@elpais.es o alicante@elpais.es).

El nuevo instituto de La Vila Joiosa

Las cosas no han ido como esperábamos, y los alumnos del IES La Malladeta no han podido incorporarse al nuevo centro en el primer trimestre del curso como estaba previsto. Eso era de esperar tal y como iba el ritmo de las obras, que han estado paradas en muchas ocasiones y en otras el personal que trabajaba era insuficiente. El Bloc ha estado siguiendo la marcha de estas obras y en muchos de los plenarios preguntábamos a la concejal sobre el tema y le advertíamos que no iban a buen ritmo, que no se acabarían en el plazo



firmado por la empresa, octubre, y que había que hacer más presión. La respuesta de ella siempre era que todo iba bien y que los plazos se cumplirían.

No sé qué ha pretendido con esta actitud y a quién ha querido engañar. El instituto nuevo

es una cuestión que importa a todos. Señora concejal, ¿por qué no quiere, con el soporte de toda la comunidad educativa, exigirle claramente a la concejal que la empresa que ha contratado cumpla los plazos?

El Bloc quiere que cuando se

haga el traslado todo esté en condiciones, pero también creo que la fecha límite de incorporación de los alumnos ha de ser después de Navidad, y tal como van las cosas parece difícil que pueda ser.— **Vicent Serra**. Concejal del Bloc en La Vila Joiosa.